

e. El terrorismo de estado en 1976-1983 sobre el transfondo de la política argentina en el siglo XX¹

Luis Roniger y Mario Sznajder

Entre 1976 y 1983, la Argentina padeció un gobierno militar que violó masivamente los derechos humanos de sus habitantes y ciudadanos, incluidos los judíos. A fin de entender ese fenómeno de vastas proyecciones políticas y culturales, cuyos ecos resuenan hasta hoy en día, es necesario analizar la evolución política y socioeconómica del país en las décadas que precedieron al gobierno militar de los años setenta y principios de los ochenta. Sólo en ese contexto amplio se puede comprender la dinámica de debilitamiento institucional y deterioro social y económico, que diera origen a la violación de los derechos humanos y la desaparición forzada de personas.

La historia de la Argentina en el siglo XX se divide en tres etapas políticas. Desde principios del siglo y hasta 1930, el país fue gobernado por autoridades electas, según el orden constitucional establecido en 1853, habiéndose ampliado la participación electoral con la ley Saenz Peña en 1912. A continuación, desde 1930 hasta 1983, el orden constitucional se vio afectado y la frágil democracia estuvo sometida a presiones que no pudo superar. En dicho lapso fueron frecuentes las revoluciones militares y la intervención de las fuerzas armadas en la toma del poder. Gobiernos militares directos se instauraron en 1930-1932, 1943-1946, 1955-1958, 1966-1973 y 1976-1983. La tercera etapa se prolonga desde 1983, momento en que la Argentina retornó al orden constitucional y conoció cambios de gobierno en el marco democrático.

Con respecto a la evolución socioeconómica, la Argentina progresó notoriamente hasta la crisis mundial de 1929. En opinión de los estudiosos, hasta entonces el país había alcanzado parámetros de desarrollo que lo ubicaban entre los más avanzados en el mundo. Hay quienes sostienen que en vísperas de dicha crisis económica, la

¹ El presente trabajo forma parte de un proyecto sobre los derechos humanos en el Cono Sur, que se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Truman de la Universidad Hebrea de Jerusalén, con el apoyo de dicho instituto y del Centro Minerva de Derechos Humanos. Por razones de espacio, hemos mantenido la referencia a autores y fuentes a un mínimo.

Argentina era un país más desarrollado que muchas naciones europeas, incluida Suiza. Desde entonces y hasta la actualidad, la Argentina se encuentra en un proceso de deterioro económico-social que, con la excepción de una tregua durante la Segunda Guerra Mundial y los dos años subsiguientes, la llevó a una situación cada vez más parecida a los demás países de América Latina, que en el pasado eran considerados mucho más pobres y débiles que ésta.²

La puesta a prueba de la democracia consiste en la capacidad de ese sistema político de superar las posibles y recurrentes crisis y responder a las demandas de aquellos grupos que desafían el orden existente. La existencia de instituciones políticas que permitan la participación política es pues condición básica para el afianzamiento de la democracia. En ese sentido, el comienzo de la disolución institucional se origina en un proceso de ampliación del sistema político, que fue llevado a cabo en Argentina sin la creación de mecanismos capaces de regular la participación de los nuevos grupos y de orientarla hacia el fortalecimiento de los principios básicos del orden constitucional y democrático. De manera similar a lo que ocurriera en otros países de Occidente, a principios del siglo XX la Argentina amplió las bases de la participación política y permitió que grandes sectores de su población tomaran parte activa en la arena política, lo que contribuyó a que llegara al poder un partido político que representaba a la clase media, el Partido Radical que, a pesar de su nombre, era un partido reformista. De manera paralela, la apertura del sistema político implicó la introducción de un discurso y un estilo populistas. A raíz de estos procesos y del creciente temor de las elites conservadoras, aunados con la infiltración de ideas fascistas en los círculos de intelectuales nacionalistas y en las filas del ejército, estalló el golpe militar del 6 de septiembre de 1930, que llevó al general retirado José Félix Uriburu a la presidencia. Uriburu retuvo el poder durante 17 meses, persiguió a la oposición, clausuró periódicos y encarceló a sus enemigos. A pesar de la influencia de las ideas fascistas, se impuso la fuerza de las antiguas elites conservadoras, los grandes terratenientes y miembros del “antiguo régimen” que habían gobernado el país hasta 1916. El intento de Uriburu y sus seguidores de modificar la Constitución hacia un modelo corporativo, fracasó y el 20 de febrero de 1932, después de la realización de elecciones presidenciales, el gobierno fue asumido

² Carlos H. Waisman, *Reversal of Development in Argentina: Postwar Counter-revolutionary Policies and their Structural Consequences*. Princeton: Princeton University Press, 1987, pp. 3-23.

por los conservadores. Éstos, liderados por el general retirado Agustín P. Justo, gobernaron el país durante más de una década, tratando de reducir la participación política masiva, reprimir los fundamentos anarquistas y marxistas de la clase obrera e imponer nuevamente los valores jerárquicos y católicos tradicionales.

Cabe señalar que la así llamada Revolución de 1930 no sólo alteró el orden democrático y constitucional, sino que condujo a la Argentina a una era en la que el gobierno recurrió a la violencia contra parte de los habitantes para lograr sus objetivos políticos. Esta actitud implicó la violación de los derechos humanos por parte de gobiernos, que desde 1930 no vacila en recurrir a arrestos, torturas, exilios y ejecuciones para enfrentar a los opositores internos. Cabe señalar ya ahora que esta violencia tiene sus raíces en las guerras civiles del siglo XIX y en las luchas contra los indígenas, y en la era del aluvión inmigratorio, recrudesció contra los sectores movilizados de la clase obrera. Sin embargo, en la nueva etapa, se inicia un cambio cualitativo, pues los altos comandos de las fuerzas armadas y de seguridad se auto-atribuyen la “representación auténtica” de la nación y en su nombre emplean la violencia no ya contra elementos ‘foráneos’ o ‘marginales’ sino contra parte de la ciudadanía. En ese sentido, cabe distinguir un proceso de escalada en el cual los militares, respaldados por una cultura política no exenta de violencia, recurrieron en forma creciente a la fuerza militar contra amplios sectores de la ciudadanía considerados como “enemigos de la nación”.

Esta definición de “enemigos de la nación” se extendió en forma paralela a los procesos de modernización y convocatoria de masas que se dieron en la sociedad argentina y que caracterizaron el período de la Segunda Guerra Mundial y los años posteriores. En aquel tiempo, la Argentina atravesó rápidos procesos de urbanización e industrialización, que no contribuyeron a la estabilidad. Señalemos también que las intervenciones militares iban perdiendo su carácter exclusivamente político ante lo que los militares percibían como una pérdida de valores que podría abatir una catástrofe sobre la sociedad argentina. Si a principios de los años treinta el gobierno militar del general Urriburu se había conformado con el poder político-militar y con la persecución de los activistas de izquierda, en especial los anarquistas, en las décadas siguientes y a medida que la clase media crecía y se tornaba más activa, las intervenciones militares se deslizaron hacia el ámbito económico, social y cultural. Cuanto más se desarrollaba en la Argentina una sociedad civil activa y en relación

directa con los procesos de modernización, más cambiaban las fuerzas armadas sus pautas de injerencia en la vida pública. Las fuerzas armadas atravesaron sus propios procesos de modernización, pero en el aspecto axiológico-cultural se desarrollaron en direcciones diferentes de las que se habían dado en la sociedad civil, y cambiaron sin integrarse a ella.³ Si en los años treinta la tendencia era autoritaria, en las décadas posteriores las fuerzas armadas que controlaban el país fueron desarrollando tendencias de intervención totalitarias. La necesidad de penetrar en la sociedad civil y controlarla se convirtió en un foco de efervescencia y convocatoria política, que nutrió los cambios ideológicos que atravesaba la cúpula militar.

El gobierno de Uriburu no tuvo éxito a nivel económico, la pobreza creció y en las grandes ciudades aparecieron las “villas miseria”. El gobierno conservador de los años treinta y parte de los años cuarenta se caracterizó por un retroceso democrático. En la Argentina, este período se conoce como “la década infame”. Durante esos años, los acontecimientos mundiales influyeron sobre lo que sucedía en la Argentina; en particular lo que ocurría en Italia, Alemania y España (el surgimiento del fascismo, el ascenso del nazismo y el apoyo de Italia y Alemania a Franco y a los nacionalistas en la Guerra Civil Española) influyó no poco sobre la oficialidad argentina. A eso se debe agregar la industrialización, surgida de la necesidad de abastecer a los consumidores del mercado local en tiempos de guerra, lapso en el cual los países industrializados casi dejaron de producir para las periferias no industrializadas. La industrialización generó un notorio incremento en la cantidad de obreros, y la migración del campo a la ciudad generó una realidad socioeconómica que se contraponía al espíritu conservador que imperaba en el país.

Vientos populistas soplaban entre los oficiales del ejército, los que, aunados a una influencia de la ideología nazi-fascista y nacionalista local acompañaron el surgimiento del GOU (Grupo de Oficiales Unidos) creado en marzo de 1943, ideológicamente opuesto no sólo al comunismo, sino también a la presencia e influencia de los Estado Unidos y el imperialismo capitalista occidental. Uno de sus

³ Mario Sznajder, “Entre autoritarismo y democracia. El legado de las violaciones de derechos humanos”, en: *El legado del autoritarismo*. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1995, edición preparada por Leonardo Senkman y Mario Sznajder, basada en el coloquio coordinado por Edy Kaufman, pp. 15-35.

líderes era el coronel Juan Domingo Perón, que habría de cambiar la historia y la política argentinas.

En septiembre de 1943 debían realizarse elecciones presidenciales. El presidente en ejercicio, Ramón Castillo, confiaba en imponer a otro candidato conservador a través de la presión y el soborno, tal como había sucedido reiteradas veces en la década anterior. Pero el 4 de junio de 1943 se produjo un golpe militar; Castillo fue derrocado y el general Arturo Rawson asumió el poder por poco tiempo, para ser reemplazado a su vez por el general Pedro Pablo Ramírez. La mayor parte de los ministros de esos gobiernos eran militares, y durante esa época la Argentina fue gobernada como lo que se conoce como un “estado guarnición” (*garrison state*).

Las fuerzas armadas empezaron a percibirse como portadoras de la nacionalidad y sus valores, que ellos consideraban sagrados, mientras que los políticos eran vistos como corruptos y amorales. El gobierno militar veía a Argentina como un país destinado a ser la potencia de América Latina. El desarrollo industrial-militar acompañaba a los aires nacionalistas. La Argentina empezó a producir hierro y acero. Mientras el país mantenía la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, surgió en él la industria militar. A pesar de las presiones de los Estados Unidos, la Argentina no declaró la guerra a la Alemania nazi hasta poco tiempo antes de la rendición de ésta última.

En el seno del gobierno se desarrollaron las luchas entre diversas facciones de oficiales, mientras Perón consolidaba su influencia y relaciones con los sindicatos a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social del gobierno militar, a cuyo frente se encontraba en aquellos tiempos. Los opositores de Perón en el ejército llevaron a su dimisión y arresto; las manifestaciones obreras masivas realizadas el 17 de octubre de 1945 condujeron a su liberación.

En ese momento, Perón se retiró del ejército y creó un frente político a través del Partido Laborista, fundado poco antes en el país. En las elecciones presidenciales de febrero de 1946, Perón obtuvo el 52 % de los votos, triunfando sobre un amplio frente de partidos tradicionales que trataron de derrotarlo con el apoyo de los Estados Unidos. Su plataforma electoral hablaba de justicia social, de un país fuerte que lideraba el proceso de industrialización y fortalecía a la Argentina, y hacía hincapié en la soberanía y la visión de una tercera vía posición alejada tanto del comunismo como

del capitalismo. Junto a Perón militaba con gran energía su segunda esposa, Eva Duarte de Perón, popularmente apodada “Evita”. Perón asumió la presidencia el 4 de junio de 1946.⁴

La era peronista fue sumamente significativa, y hay quienes sostienen que cambió la historia política del país por varias razones. Es probable que la más importante de ellas radique en la implementación de los principios de la justicia distributiva para las masas que poblaban la periferia urbana y el interior del país. La derivación de recursos a favor de estos grupos poblacionales estaba directamente relacionada con su movilización social y política como parte de las bases de sustentación del nuevo gobierno. Con Perón, la economía se convirtió de liberal en proteccionista, con una notoria injerencia del estado en todas las áreas y con la intención de desarrollar una economía de carácter autárquico, es decir, con el objetivo de alcanzar la independencia económica. Esta política promovió el proceso de industrialización y sentó las bases de la industria pesada argentina. Asimismo, la exaltación de esta época se vio favorecida por el hecho de que la Argentina pasó incólume la Segunda Guerra Mundial, y adquirió especial importancia como productora y exportadora de alimentos para una Europa destruída por la guerra. La intervención estatal en la economía se puso de manifiesto con la nacionalización de los ferrocarriles - que pertenecían a empresas inglesas y francesas - a cambio de compensaciones muy generosas, y en la compra por parte del Estado de la compañía inglesa de gas y de las usinas eléctricas. El Estado ingresó en el área del transporte, creó las líneas aéreas nacionales y compró empresas de navegación. Al mismo tiempo controló el comercio exterior de la producción agrícola y nacionalizó el Banco Central, siendo garante de todos los depósitos estatales, lo que lo convirtió en el factor más importante en todas las áreas de la economía. Todo esto se llevó a cabo ampliando el empleo en el área de la administración pública. El Estado trató también de reducir el costo de vida y de combatir el agio y la especulación. Asimismo, en el marco de los intentos de desarrollar una economía autárquica, el gobierno peronista elevó los cupos protegidos de toda la producción industrial que el país empezaba a generar. Las dos facetas de esta política eran un control de la economía que permitía generar la imagen de un gobierno que se preocupaba por el pueblo, creando vastos

⁴ Félix Luna, *Breve historia de los argentinos*, Buenos Aires: Planeta, 1993, 17ª edición, pp. 215-231.

mecanismos de asistencia social, y la intervención en la economía orientándola en una dirección que no se adecuaba a las tendencias liberales adoptadas para reconstruir la economía de Occidente después de la guerra. Mientras las reservas acumuladas durante la guerra lo permitieron, la economía argentina logró cumplir con los objetivos fijados por el gobierno; pero la financiación de las nacionalizaciones, el pago de la deuda externa y las inversiones en desarrollo y bienestar social llevaron a un abrupto descenso de las reservas. Cuando éstas se redujeron, el modelo de desarrollo populista se agotó y la Argentina volvió a entrar a la secuencia ininterrumpida de crisis que se perfilaba ya desde 1930.

La política nacional-populista de Perón aspiraba a ser “la tercera posición”, una vía alternativa al comunismo y el capitalismo, sin adoptar abiertamente los principios del fascismo. Pero el nacionalismo, el corporativismo, la convocatoria de las masas y la política exterior anti-imperialista colocaron a las políticas argentinas en un plano de discordia con los Estados Unidos y las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Fiel a los principios ideológicos que había trazado, Perón ayudó al régimen del generalísimo Franco en una España sumida en una honda crisis económica e internacional después de la guerra. En aquellos tiempos tan difíciles para la España de Franco, la Argentina le brindó crédito y alimentos. Cuando Eva Perón viajó a Europa, fue recibida en Madrid con los honores reservados a reyes y jefes de estado, en su carácter de esposa de Perón.⁵

El peronismo ingresó a la escena política argentina convocando a las masas y convirtió el liderazgo de Perón y Evita - que expresaba su lealtad a las metas sociales a través de una extraordinaria capacidad retórica - en un hecho irreversible por una parte y, por la otra, pasible de diferentes interpretaciones y situado en el foco del conflicto político, lo que despertaba una gran polarización y compromisos contrapuestos.⁶

Perón fue reelecto en 1951, con la ayuda de la imagen carismática y casi mítica de Evita. Eva Perón contribuyó en forma especial a la creación del vínculo entre Perón y la clase trabajadora. Al mismo tiempo presidía la Rama Femenina del Partido

⁵ Raanan Rein, *The Franco-Peron Alliance, Relations between Spain and Argentina*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1993, pp. 53-64.

⁶ Torcuato S. Di Tella, *Historia social de la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: Troquel, 1998, pp. 277-290.

Peronista y, sin duda, aseguró el apoyo a Perón de muchas mujeres que en 1951 votaron por primera vez en la historia del país. La segunda presidencia de Perón, que empezó en junio de 1952, debía extenderse hasta junio de 1958. Desde sus comienzos se dieron intentos de aglutinar el apoyo a Perón a través de diversas organizaciones de carácter a un tiempo corporativista y popular. Perón logró crear una red de sindicatos sometidos a su autoridad. Una vez neutralizados los sindicatos autónomos, sus seguidores se organizaron en la CGT (Confederación General del Trabajo). Por otra parte, ciertos procesos y acontecimientos debilitaron a Perón en su segunda presidencia; entre los más destacados se cuentan los enfrentamientos del gobierno y sus seguidores con la oposición, la muerte de Evita a mediados de 1952, la crisis económica y, finalmente, el abandono de la tercera posición en la palestra internacional y el alineamiento con los Estados Unidos.

Su política generó oposición. Por ejemplo, atacó a la Suprema Corte de Justicia que se le oponía y la acusó de representar al elitismo conservador. En 1949, el peronismo impuso la reforma constitucional cuyo principal objetivo consistía en permitir la reelección del presidente. Asimismo, la modificación de la Constitución estaba destinada a permitir una política estricta ante la existencia de monopolios que prestaban servicios públicos, y a apresurar su traspaso al Estado. También se fortaleció el control estatal de los recursos naturales del país. Con el paso del tiempo, esta rigidez constitucional resultó difícil aun para Perón, que durante la crisis económica debió guardar fidelidad a los principios constitucionales y perdió la oportunidad de sacar al país de sus apuros. No obstante, la Iglesia y las fuerzas armadas fueron los factores decisivos en el derrocamiento de Perón, con el golpe militar en septiembre de 1955. En noviembre de 1954 Perón atacó a la Iglesia, que respondió con procesiones de corte netamente anti-peronista. Perón promulgó una legislación anticlerical, y las procesiones y enfrentamientos se agravaron. El 16 de junio de 1955, algunos sectores de las fuerzas armadas se rebelaron y bombardearon el centro de Buenos Aires; el saldo fue de casi trescientos muertos, pero Perón no fue derrocado: sus partidarios se sublevaron, atacaron iglesias y las incendiaron. Los intentos de sostener a Perón no tuvieron éxito y el 16 de septiembre de 1955 estalló una segunda revuelta en Córdoba y en el seno de la marina de guerra. Después de tres días de enfrentamientos entre rebeldes y leales, Perón dimitió y declaró que lo hacía para evitar la guerra civil. A la mañana siguiente, el gobierno paraguayo le concedió

asilo político y fue trasladado a dicho país, desde donde seguiría hacia Venezuela, Panamá y luego al prolongado exilio en España.

El golpe, que se autotituló la “Revolución Libertadora”, estuvo encabezado por altos oficiales comprometidos con la expulsión de Perón y el peronismo de la escena política argentina. Estos objetivos generales debían alcanzarse a través del pleno control del sistema político, la puesta del Partido Justicialista al margen de la ley, el proceso de desmovilización de las masas, el cambio de la política económica en beneficio del sector privado y la preservación de los principios católicos conservadores.⁷ Esto se hizo muy evidente en noviembre de 1955, cuando el general Pedro Eugenio Aramburu se convirtió en el presidente militar de la Argentina, reprimió a los partidarios de Perón que se habían rebelado en junio de 1956 y fusiló a cerca de 30 líderes de la rebelión. Estos fusilamientos fueron los primeros en más de cien años, hecho que constituyó una escalada más en la ola de violencia y represión militar.

De 1955 a 1973, el peronismo fue el gran ausente-presente de la política argentina. Sin una presencia partidaria oficial, el peronismo y Perón desde su exilio en Madrid (ciudad en la que se radicó con la protección de Franco) determinaron el destino de las elecciones a pesar de los militares. Así, hacia 1958 la cúpula militar decidió restaurar el gobierno democrático-civil. En febrero de 1958 se realizaron elecciones, en las que se prohibió la participación de entidades políticas peronistas; muchos votaron en blanco. Arturo Frondizi resultó electo presidente de la República. Los rumores señalaban que se había acordado un pacto entre Frondizi y el peronismo, por el cual éste le entregaría sus votos a fin de asegurarle el triunfo electoral. Sea cual fuere la verdad, los intentos de generar un proceso de retorno a los valores tradicionales y a la desmovilización masiva, disolviendo al peronismo como movimiento político, fracasaron, y dieron origen a una creciente violencia política en la vida pública. La residencia de Perón en Madrid se convirtió en sitio de peregrinaje no sólo para sus adeptos, sino también para muchos otros actores políticos. El peronismo conservó su poder y aun lo extendió; paralelamente, se dividió en diversos grupos. En los años sesenta y setenta surgió una honda brecha entre los sectores de

⁷ David Rock, *Authoritarian Argentina. The Nationalist Movement, its History and its Impact*. Berkeley: University of California Press, 1993, cap. 6.

derecha nacionalista e izquierda revolucionaria que se habían desarrollado en el seno del peronismo.

Frondizi ejerció la presidencia durante cuatro años, lapso en el cual los militares le presentaron más de treinta planteos. Las fuerzas armadas se convirtieron en un factor político significativo y se hicieron oír en circunstancias anticonstitucionales. Sus planteos básicos guardaban relación con la necesidad que sentían de dejar al peronismo fuera del escenario político.

Los años sesenta fueron también los de la Revolución Cubana, con el ascenso de Fidel Castro al poder en 1959. Castro derrotó a Batista con un puñado de revolucionarios, una de cuyas principales figuras era el médico argentino Ernesto Guevara, conocido como el “Che”, apodo que indicaba su procedencia. La Revolución Cubana y las reacciones que despertó (el embargo norteamericano a la isla, la invasión a la Bahía de los Cochinos y la crisis de los misiles en 1962) introdujeron inequívocamente a América Latina en la guerra fría. Las relaciones de la Argentina con la Cuba revolucionaria fueron un factor más que se agregó a la presión ejercida por el peronismo sobre el sistema político que Frondizi trataba de estabilizar. El presidente fue derrocado por el ejército el 29 de marzo de 1962 y enviado a prisión en la isla de Martín García, para neutralizarlo de cualquier actividad política. Esta vez, los militares optaron por designar a un civil al frente del gobierno y permitieron el nombramiento de José María Guido, vicepresidente del Senado, como presidente de la república. La política implementada por Guido le era impuesta por el ejército, que exigió la anulación de las elecciones de marzo de 1962, en las cuales los peronistas habían participado con diferentes nombres y listas y logrado la mayoría en nueve provincias, incluida Buenos Aires, la más grande e importante de todas.

En 1962 y ante las múltiples crisis en las que el país se veía inmerso, las fuerzas armadas estaban divididas y el país se encontraba al borde de la guerra civil. En septiembre de 1962 estallaron combates entre diferentes sectores del ejército, y los “azules” se impusieron. El general Juan Carlos Onganía fue nombrado Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Después de varias intentonas frustradas de golpe por parte de la Fuerza Aérea en diciembre de 1962, y de la Marina en abril de 1963, se convocó a nuevas elecciones presidenciales en la que triunfó el candidato radical Arturo Illía, que se desempeñó en el cargo desde ese año hasta junio de 1966, fecha en la que fue depuesto por las fuerzas armadas, que enarbolaban la consigna de la

“Revolución Argentina”. Los rebeldes designaron al general Juan Carlos Onganía como presidente, con atribuciones sin precedentes hasta ese entonces en la historia del país. Los principios fundacionales denominados “Acta de la Revolución Argentina”, se impusieron a la Constitución. El nuevo gobierno disolvió el parlamento y asumió las funciones legislativas; se anuló la autonomía federal y los gobernadores provinciales pasaron a ser designados por el presidente. El país fue gobernado a través de decretos de emergencia convertidos en decretos-ley. La concepción básica del general Onganía era que se debía conducir al país a un proceso de despolitización similar al que él mismo había implementado con éxito en el seno de las divididas fuerzas armadas a principios de los años sesenta. Onganía trató de trasladar el modelo militar jerárquico y piramidal al país entero: redujo la cantidad de ministros, concentró poderes, enfatizó la importancia del asesoramiento tecnocrático y trató de imponer un sistema de valores presuntamente destinado a evitar la posibilidad de una revolución marxista. La moral pública y privada se convirtieron en una cuestión central para el nuevo gobierno militar: la censura se aplicó con todo rigor a la prensa escrita y otros medios de comunicación, y también a las manifestaciones artísticas; se prohibieron filmes considerados peligrosos y se quemaron libros de contenidos marxistas o similares. El gobierno militar trató de llegar a todos los sectores y de penetrar en la sociedad civil para controlarla a través de la imposición de concepciones, valores y normas de conducta: se clausuraron clubes nocturnos y otros lugares de encuentro de parejas; se prohibió que las mujeres vistieran pantalones y faldas cortas en las escuelas y oficinas públicas. La influencia católica integrista era bien percibida. Onganía, que actuaba sin ningún freno constitucional y sin plazos preestablecidos, sostenía que debían enfocarse primero todos los asuntos económicos, después los problemas sociales y sólo entonces se permitiría un juego político más abierto.

Las presiones iban en aumento. En mayo de 1969 estallaron disturbios estudiantiles en la provincia de Corrientes, que fueron reprimidos por fuerzas militares enviadas desde la capital. Cientos de manifestantes resultaron heridos y hubo un muerto. Los disturbios se extendieron a otras ciudades y el número de muertos aumentó. El 29 de mayo estalló una revuelta popular en Córdoba (la tercera ciudad de la Argentina), apodada “el Cordobazo”, en la que participaron de manera conjunta obreros y estudiantes que ocuparon el centro de la ciudad y prendieron fuego a

automóviles y tiendas de comercio. El ejército controló la ciudad con un saldo de decenas de muertos y cientos de heridos. La zona céntrica resultó parcialmente incendiada y destruida.

Los intentos de reorganizar la sociedad argentina en un marco burocrático-autoritario, tal como quería el general Onganía, llevaron al surgimiento de grandes presiones en todos los ámbitos de la sociedad. Los objetivos del gobierno consistían en reunificar los desgarramientos internos y acabar con la politización social, imponiendo un régimen autoritario que monopolizara las decisiones políticas y que se apoyara en tecnócratas profesionales y confiables. El presidente, en su carácter de comandante en jefe, debía contar con la autoridad de traducir el interés general en órdenes concretas. Según su visión, el comandante en jefe era la encarnación racional de todo el colectivo, una racionalidad moralmente justificada cuyos exponentes e intérpretes podían y debían liderar el país de acuerdo con esta concepción.⁸

La combinación de una situación socio-económica en deterioro con una política autoritaria despertó la oposición al gobierno de diversas maneras. Los disturbios de mayo de 1969 fueron una de sus manifestaciones; otra, no menos importante a largo plazo, fue el surgimiento de movimientos guerrilleros revolucionarios. Estos movimientos, cuyos primeros brotes habían surgido antes de 1966, brindaban al ejército la justificación para la revolución militar que habían perpetrado. No obstante, la cristalización plena de la guerrilla tuvo lugar en 1968-1969, cuando los movimientos atacaron al gobierno militar y sus representantes. En aquel entonces empezaron a actuar – en un principio en zonas rurales - dos movimientos marxistas: FAL, Fuerzas Armadas de Liberación (de orientación leninista) y el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo (trotskista). Otros grupos, inspirados en la Revolución Cubana y cercanos al peronismo, nacieron en aquella época y se unieron al movimiento guerrillero más grande en la Argentina, los Montoneros, creado en 1967 por ex-activistas católicos, parte de los cuales en una etapa anterior, cuando aún eran estudiantes secundarios, habían formado parte de “Tacuara”, un movimiento nacionalista, extremista y antisemita. Los Montoneros se acercaron al peronismo en la versión que abogaba por la justicia social, y justificaban la necesidad de la lucha armada contra el gobierno militar conservador. El 29 de mayo de 1970, Montoneros

⁸ Guillermo O'Donnell, *Bureaucratic Authoritarianism. Argentina, 1966-1973*, in: *Comparative Perspective*. Berkeley: University of California Press, 1988, pp. 1-38.

secuestraron al general Aramburu, ex presidente militar de la Argentina hasta 1958, que fue trasladado a las afueras de la capital y “juzgado” por un tribunal revolucionario popular por su participación en los fusilamientos de activistas peronistas en 1956 y por la desaparición del cadáver de Eva Perón después de la revolución de 1955. Aramburu fue ejecutado con un disparo en la cabeza. En una serie de comunicados, los Montoneros se definían como “una unión de hombres y mujeres profundamente argentinos y peronistas, dispuestos a pelear con las armas en la mano por la toma del poder para Perón y para su pueblo, y la construcción de una Argentina libre, justa y soberana.”⁹

A principios de los años setenta aumentaron los enfrentamientos entre la policía y las fuerzas de la guerrilla, que cobraron numerosas víctimas. A medida que crecía la oposición al régimen, los intentos de Onganía de imponer orden y fundar una sociedad nueva desde arriba, desde el gobierno, se revelaban como inútiles. En junio de 1970 las fuerzas armadas decidieron reemplazar a Onganía por el general Roberto Levingston; las acciones guerrilleras aumentaron aún más. Los sindicatos y los trabajadores empezaron a organizar huelgas generales y Levingston trató de calmar la efervescencia implementando una política populista cercana a los reclamos peronistas. En marzo de 1971, ante el creciente deterioro de la situación del país, la cúpula militar decidió nuevamente reemplazar al presidente, y designó al general Alejandro Agustín Lanuse. Esta vez, los generales entendieron que la “Revolución Argentina” había fracasado y que no existía ninguna posibilidad de estabilizar la situación política sin la cooperación de los peronistas.

La esfera pública había desbordado el control estatal. Fueron esos años de efervescencia cultural y política, de ejercicio crítico en las ciencias sociales y las humanidades, de reformulación de la teoría de la dependencia en oposición al desarrollismo de los '60, de desarrollo de las organizaciones populares y proyección de la retórica de liberación nacional y de creciente violencia y uso de varios discursos con contenidos utópicos y redentores.

Políticamente, se decidió entonces convocar a elecciones generales en marzo de 1973 y se permitió la participación del peronismo, de hecho por primera vez desde 1951. En estas elecciones triunfó el candidato peronista Héctor Cámpora, quien

⁹ Félix Luna, *Golpes militares. De la dictadura de Uriburu al terrorismo de estado*. Buenos Aires: Planeta, 2001, p. 102.

declaró que su gobierno sería un gobierno de transición fundamentalmente destinado a preparar el retorno de Perón desde su exilio en Madrid. En julio de 1973 Cámpora renunció y se fijaron nuevas elecciones presidenciales para septiembre; en ellas triunfó el general Perón, acompañado en la fórmula presidencial por su tercera esposa María Estela Martínez de Perón, “Isabelita”.

El regreso de Perón despertó muchas esperanzas, más allá del retorno a la democracia. Muchos lo veían como el único líder histórico capaz de unir a la Argentina y cerrar las heridas del país. Casi todos los sindicatos lo consideraban su líder natural. Habían quienes confiaban en que, a partir de su retorno, cesaría la ola de huelgas y habría reformas económicas. Perón se perfilaba como la persona capaz de controlar la guerrilla y reducir el nivel de violencia. Más allá de ello, las asociaciones de industriales y empresarios lo apoyaban y esperaban que pudiera imponer la calma. Finalmente, Perón logró también un cambio drástico en la actitud del Partido Radical. Los radicales, la segunda fuerza política del país, eran enemigos tradicionales del peronismo; en 1972, el líder radical Ricardo Balbín firmó un acuerdo con Perón, que permitió la realización de las dos rondas electorales en 1973, las que finalmente condujeron al retorno de Perón al país y al gobierno.

El retorno del líder, anciano y enfermo, decepcionó a muchos. Se debe recordar que el propio Movimiento Peronista estaba desgarrado entre el ala de derecha y la de izquierda. Cuando Perón regresó a la Argentina en junio de 1973, un millón de personas acudieron a recibirlo; en la multitud congregada para darle la bienvenida estallaron enfrentamientos entre ambos bandos: los Montoneros y la izquierda peronista por un lado, y la derecha nacionalista peronista por el otro. El resultado fueron varios cientos de muertos. Las tensiones se agudizaron cuando Perón asumió el poder: implementó una política económica de austeridad a fin de tratar de frenar la inflación, lo que llevó al estallido de una nueva ola de huelgas. Asimismo, ordenó reprimir la guerrilla, que no había depuesto las armas.

El retorno de Perón y su breve período presidencial (hasta su muerte en julio de 1974) no fueron pregoneros de una nueva era de calma y estabilidad, sino todo lo contrario. La Argentina comprobó que debía afrontar problemas que ni siquiera el anciano líder, por más importante que fuera, podría reparar por la sola fuerza de su personalidad. La muerte de Perón, el 1 de Julio de 1974, constituyó un nuevo golpe para el sistema político argentino; era obvio que todos los acuerdos logrados con su

participación y alrededor de su figura y autoridad dejarían de existir. Con su muerte asumió el poder su viuda, la vicepresidenta, carente de los requisitos mínimos para conducir un país en crisis. Además de ello, el hombre fuerte a espaldas de Isabelita era José López Rega, ex secretario de Perón identificado con la extrema derecha. López Rega, en aquel entonces ministro de Trabajo, apoyaba a la Alianza Argentina Anticomunista, una organización terrorista paramilitar que se había impuesto como cometido la eliminación física de la izquierda, a través de secuestros y asesinatos. La acción guerrillera se incrementó. En las ciudades y en el interior la situación seguía deteriorándose y el gobierno de Isabelita ordenó a las fuerzas armadas que combatieran a la guerrilla. En 1975 y a principios de 1976, el ejército y la policía aniquilaron a la guerrilla rural en el norte del país, y a los grupos de guerrilla urbana en las grandes ciudades. De manera paralela a estas acciones, las fuerzas armadas contaban también con la colaboración de grupos paramilitares de extrema derecha. La gravedad de la crisis, el fervor ideológico de los contrincantes y el deseo de derrotar definitivamente a la izquierda y asegurar la victoria para siempre, llevaron finalmente a las fuerzas armadas a derrocar a la presidenta el 24 de marzo de 1976.

En esa fecha empieza el capítulo más tenebroso en la historia moderna de la Argentina, cuando el gobierno militar presidido por el general Jorge Rafael Videla dio comienzo al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (PRN).

En el curso de dicho proceso, la cúpula militar intentó purgar a la Argentina de todos sus elementos marxistas, revolucionarios o de izquierda. Ya en los últimos meses de 1975 el comando del Ejército elabora una ‘Doctrina de Guerra’, que fue posteriormente aprobada por los altos mandos de la Armada y la Fuerza Aérea, y que contempla la eliminación física de la “subversión apátrida” y el uso del terror generalizado para impedir que la guerrilla “se moviera como pez en el agua”. Una vez en el poder, los militares procedieron a aplicar un plan político, social, económico y cultural destinado a modificar el país según los parámetros ideológicos de su doctrina de la Seguridad Nacional, que recibía influencias diversas aunadas por el denominador común de un anticomunismo exacerbado. En el marco de la guerra fría, los Estados Unidos capacitaban a los oficiales latinoamericanos en la Escuela de las Américas ubicada en la zona del Canal de Panamá, y en campos de adiestramiento dispersos en los Estados Unidos y en otros lugares. Esta preparación incluía la lucha para impedir el ingreso de la guerrilla y promover la difusión de concepciones anti-

soviéticas, anti-cubanas y anti-comunistas destinadas a proteger al continente americano de la influencia marxista. La segunda orientación de influencia ideológica provenía de la experiencia francesa en la guerra de Argelia, en cuyo transcurso el ejército francés se había adiestrado en la lucha contra la guerrilla y contra grupos subversivos urbanos. La implementación del contra-terrorismo como forma de controlar grandes poblaciones, las diversas clases de guerra psicológica y la desaparición forzada de personas, que formaban parte de la experiencia acumulada por Francia, fueron transmitidas a los ejércitos de América Latina por oficiales de inteligencia franceses. La tercera orientación guarda relación con las concepciones de Erich Ludendorff, tal como se ponían de manifiesto en sus escritos, en especial en su libro *La Guerra Total*. Ludendorff sostenía que una condición indispensable para la victoria en las guerras modernas consistía no sólo en la victoria militar en el campo de batalla, sino en la victoria interna, en el seno de la sociedad, puesto que el nuevo enemigo, el comunismo, se infiltra en las sociedades y por eso debe ser aniquilado a través de una purga social profunda. El cuarto rumbo radicaba en la influencia nacionalista católica e integrista sobre el ejército argentino.¹⁰

Sobre la base de dichas doctrinas y en el curso de su proyecto de ‘reorganización nacional’, el gobierno del general Videla emprendió la persecución masiva de todos aquellos definidos como enemigos de la nación. Se disolvió el parlamento, se prohibió la actividad política, se reprimió a los sindicatos y en todo el país se implementó una política caracterizada por las persecuciones y detenciones, la existencia de campos de concentración clandestinos, las torturas y asesinatos. Se debe tomar en cuenta que la revolución de 1976 se inició dos años y medio después de los golpes militares en Uruguay y Chile. Estos procesos en los países vecinos modificaron en cierta medida el marco de la represión en la Argentina, porque aquellos acontecimientos habían bastado para crear una conciencia internacional y una opinión pública hostil a los gobiernos militares. Asimismo, generaron el intento de las organizaciones locales e internacionales de derechos humanos de frenar los procedimientos de represión dando difusión pública a acciones vinculadas con ella, lo que influyó sobre muchos gobiernos extranjeros. De la misma manera, la elección del presidente Carter en los Estados Unidos implicó un cambio en la política exterior de ese país con respecto a

¹⁰ Luis Roniger y Mario Sznajder, *The Legacy of Human-Rights Violations in the Southern Cone. Argentina, Chile and Uruguay*. Oxford: Oxford University Press, 1999, cap. 1.

las violaciones de los derechos humanos. No obstante, los gobernantes en la Argentina creyeron poder obviar las consecuencias de sus acciones y perpetraron violaciones masivas de derechos humanos y emprendieron acciones de represión clandestina al tiempo que trataban de convencer a la opinión pública argentina e internacional de sus aciertos, sembrando la desinformación sobre su accionar.¹¹

Las formas de la represión en la Argentina guardaban relación con la estructura de las fuerzas de seguridad y con el grado de compromiso de los diversos comandantes con la visión de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Los mecanismos de represión fueron emplazados en todas las regiones del país, aunque no en forma uniforme. Las grandes ciudades sufrieron más que las zonas rurales, a excepción de aquellas regiones rurales en las que en el pasado habían luchado las fuerzas de la guerrilla, como la provincia de Tucumán. Existe una continuidad entre el incremento de la violencia política en la Argentina desde 1930, y en especial en los años sesenta y setenta, y la represión extrema de la última dictadura militar, de 1976 a 1983. Las órdenes emitidas por los comandos fueron enunciadas en términos muy generales: sofocar la insurrección y aniquilar al enemigo, dejando una zona gris sumamente amplia abierta a la consideración y decisiones de los comandantes locales, y a las interpretaciones de los niveles inferiores. Sin embargo, existe evidencia clara que la Secretaría de la Información de Estado (SIDE) elevaba informes confidenciales y secretos, reportando diariamente a la Presidencia y el Ministerio del Interior sobre los operativos realizados en la jornada, las fuerzas o grupos de tareas involucrados y los resultados de los allanamientos, detenciones y enfrentamientos.

En su persecución del “enemigo”, las fuerzas de seguridad se basaban en la división del país en cinco zonas de comando militar y en “Grupos de Tareas” (GT) con cierta especialización, aunque mantuvieran intercambio de información y prisioneros. El objetivo del GT1 del Ejército era la represión del ERP, el GT2 de la Aeronáutica debía ocuparse de las FAL, FAP y otras organizaciones menores, el GT3 de la Armada y el GT4 de la Policía Federal tenían por objetivo reprimir a los Montoneros. Cada grupo de tareas tenía sus propios centros de detención, en forma paralela a la subdivisión en brigadas y regimientos ubicados cerca de las ciudades, hecho que impuso las pautas geográficas de la represión. Durante la represión

¹¹ Alyson Brisk, *The Politics of Human Rights in Argentina*. Stanford: Stanford University Press, 1994, pp. 52-53.

funcionaron unos trescientos centros de detención – de hecho, campos de concentración – a todo lo largo y lo ancho del país. La cadena de mandos de las acciones represivas contra la izquierda y sus seguidores era paralela a la jerarquía militar formal. Las acciones corrientes ejecutadas por los grupos de tareas compuestos por soldados y oficiales que prestaban servicios en las diversas fuerzas de seguridad estaban también destinadas a comprometer a todos los participantes ejecutores en un “pacto de sangre” o “pacto de silencio” en torno a los actos represivos cometidos. Vale decir, se estableció un sistema de mando rotativo con el objeto de distribuir las responsabilidades y ampliar los círculos de implicados en el accionar represivo, a fin de generar un “pacto de silencio” entre todos los individuos que habían participado en los diversos operativos. Se preservaba un alto grado de confidencialidad, mientras los altos mandos exigían la victoria absoluta contra la izquierda y sus seguidores, de manera rápida y eficiente. Las órdenes llegaban desde la propia junta militar, pero eran ejecutadas por unidades que dependían directamente de los comandos, generalmente a nivel de regimiento. Sus autoridades eran responsables de los centros de detención. El carácter generalizador de las órdenes, junto con una división operativa que imponía la responsabilidad de ejecución directamente sobre los comandantes regionales y con la división y composición semi-clandestina de las fuerzas dieron lugar a pautas de autonomía de hecho y de falta de coordinación en la aplicación de la estrategia represiva. Ésa es una de las razones de la aplicación de una violencia desenfrenada contra los activistas de izquierda y también contra individuos capturados por las fuerzas de seguridad de manera casual, circunstancial o por oscuros motivos de lucro o discreción personal. La directiva de obtener información rápida llevaba a incrementar las torturas y a ejercer una violencia de gran intensidad y sadismo contra todas las víctimas. En determinadas regiones, el accionar represivo se focalizaba en personas, sectores e instituciones específicos; en otros sitios, como la provincia de Buenos Aires, la represión se dirigió de manera premeditada contra los subversivos, sus aliados ideológicos, seguidores y allegados. El general Ibérico Saint-Jean, gobernador de la provincia de Buenos Aires en tiempos de la primera junta militar, declaró que “primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes, y finalmente mataremos a los tímidos”.¹² Esta postura totalitaria subyacía

¹² John Simpson and Jana Bennett, *The Disappeared. Voices from a Secret War*. London: Robson Books,

en las pautas de ejercicio de terror de estado contra sectores sospechosos, pero la represión de las fuerzas armadas amenazaba también a muchos habitantes del país que difícilmente estaban vinculados con la izquierda, y a aquellos que no tenían relación alguna con ninguna tipo de actividad política.

El clímax de las acciones represivas se generó en torno a los desaparecidos. Personas desaparecían en toda clase de circunstancias. También desaparecían quienes trataban de encontrar a los desaparecidos, o de defenderlos en los tribunales presentando recursos de hábeas corpus. Otros fueron secuestrados por las fuerzas de seguridad en lugar de un familiar o por error, pero nunca regresaron. Hubo quienes desaparecieron por causa de delitos comunes: en algunos de estos casos, el objetivo de los represores era el de apoderarse de sus propiedades o su dinero. Hubo casos de personas secuestradas por ajustes de cuentas personales, desaparecidas en centros de detención y asesinadas, sin relación alguna con actividades políticas. El número de desaparecidos –que fueron asesinados, casi ciertamente – está en discusión hasta el presente, y oscila entre una estimación de aproximadamente 9.000 personas hasta cálculos que lo elevan a 30.000 personas.

El perfil de las víctimas muestra el enseñamiento con determinados sectores, como la clase obrera (según el informe de la CONADEP, se trata de un 30,2 % de las víctimas), estudiantes universitarios (21 %), empleados (17,9 %) y profesionales (18,3 % según dicho informe). Los trabajadores autónomos y otras categorías constituyen un 10,1 % de las víctimas. Un dos y medio por ciento de las mismas eran soldados en servicio militar y suboficiales, porcentaje que incluye a quienes aparentemente mostraron resistencia a las tendencias y políticas del gobierno militar. En las profesiones liberales, la maquinaria represiva se ensañó especialmente con quienes ejercían profesiones “subversivas”, como la psiquiatría, la psicología, la sociología y las ciencias políticas, es decir, profesionales con orientación social sospechosos de simpatizar con el comunismo. Cuando se comparan los porcentajes de los diversos segmentos laborales de la población en general con su distribución entre las víctimas, se puede comprobar que los profesionales están sobre-representados: mientras que en 1970 los profesionales constituían un 7,5 % de la fuerza laboral activa, fueron un 18,3 % de las víctimas. A partir de datos cualitativos se puede afirmar con certeza que esta tendencia se reitera en el caso de los estudiantes, en especial universitarios pero

también secundarios, sospechosos como categoría global de actividades políticas de izquierda. Un 79 % de los desaparecidos reconocidos por la CONADEP vivían en ciudades, un 57 % de ellos en las más grandes del país. Cerca de un tercio de las víctimas eran mujeres, un 3,8 % de ellas amas de casa. Esto guarda relación con el hecho de que un 62 % de los desaparecidos fueron detenidos en sus domicilios, contra un 24,6 % arrestados en la calle, un 7 % en lugares de trabajo y un 6 % en los lugares de estudio. En cuanto a las edades, más de un 81 % de las víctimas tenían entre 16 y 35 años.¹³

Entre las víctimas de las persecuciones que tuvieron lugar en la Argentina en los años setenta y principios de los ochenta muchos eran judíos o de origen judío. Hay quienes sostienen que el porcentaje de judíos entre los desaparecidos es diez veces mayor que el porcentaje de judíos en la población total del país en aquellos tiempos. Por supuesto, estas estimaciones dependen de la definición que se adopte de quién es judío, y paralelamente, del número de judíos que activaban en movimientos de izquierda y de la proporción de judíos en las casas de altos estudios en las que había actividad política y entre los docentes universitarios sospechados de subversivos. Por otra parte, no caben dudas de que los judíos fueron señalados para un “tratamiento especial” al ser detenidos, puesto que muchos sectores de las fuerzas de seguridad y el ejército estaban impregnados de antisemitismo popular. Más allá de eso, aún antes del golpe en los años setenta, había organizaciones para-militares de extrema derecha que actuaban contra la izquierda en general y contra sus activistas judíos en especial, a quienes perseguían tanto por el activismo que llevaban a cabo como por el odio a su judaísmo.

Se puede decir que el destino de las víctimas judías de la persecución y represión fue particularmente difícil porque, ideológicamente, los detenidos judíos eran percibidos por sus captores como “la encarnación del mal”. Esta visión incluía la aceptación de *Los protocolos de los sabios de Sión* y de ideas nazis originarias de la Alemania de Hitler. No faltan testimonios sobre expresiones antisemitas, sobre la manifiesta admiración a Adolf Hitler y sus ideas y sobre la interpretación de canciones nazis en las sesiones de tortura. Por otra parte, los jefes de las juntas militares creían en el poderío del Estado de Israel y, fundamentalmente, en su

¹³ *Nunca más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas*. Buenos Aires: EUDEBA, 20ª edición, 1995, pp. 17 y 294-296.

influencia sobre el gobierno norteamericano en Washington. Es probable que estas posturas puedan explicar el hecho de que, de manera paralela a la gran cantidad de víctimas judías en tiempos del Proceso de Reorganización Nacional, la vida comunitaria siguió relativamente su curso habitual y se continuaron existiendo relaciones entre el gobierno y las organizaciones de la comunidad judía, en especial la DAIA, la entidad-techo de las organizaciones judías en la Argentina.

En términos generales se puede decir que, si bien las persecuciones anti-judías en la Argentina no formaban parte de la política oficial, hubo muchas víctimas judías en el marco de la lucha contra la izquierda y la oposición al gobierno militar. No pocos judíos debieron marchar al exilio político para salvar la vida. La represión y el terrorismo de Estado indican no sólo un incremento en el uso de violencia contra civiles, sino que también constituyen un hito en la trayectoria del antisemitismo violento en la Argentina, una de cuyas cumbres previas se había dado en el pogromo anti-judío de 1919 conocido como la “Semana Trágica”.

La pautas de la represión contra civiles sospechados de opositores y contra la izquierda demuestran la existencia de una política de terrorismo de Estado. La represión fue ejercida a partir del desprecio por las normas básicas del derecho y la justicia, el uso masivo de torturas, la anulación de los derechos civiles y la violación de los derechos humanos, las ejecuciones sumarias y, por encima de todo, la desaparición forzada de personas, acerca de cuyo destino las autoridades militares sostuvieron durante mucho tiempo no saber nada.

La Argentina se vio sumida en una ola de terror de estado y represión cruel, en cuyo marco las instancias gubernamentales lograron limitar la actividad jurídica normal y la influencia de los marcos sociales que en tiempos normales pueden mitigar las violaciones de los derechos humanos. En una etapa muy temprana del gobierno militar, muchos abogados empezaron a vacilar en comparecer ante los tribunales por temas vinculados con desaparecidos. Después de la desaparición de varios abogados que habían presentado recursos de hábeas corpus, muchos otros se negaron a seguir haciéndolo. Paralelamente, la mayor parte de la jerarquía eclesiástica se abstuvo de interceder por los desaparecidos y no sólo no repudió públicamente la represión, sino que muchos de sus integrantes apoyaron en silencio – y más que eso – al gobierno

militar al que veían como aliado ideológico, a diferencia de otras interpretaciones de los principios del catolicismo.¹⁴

La dictadura militar quería imponer la reorganización del Estado purgando a la sociedad de sus elementos de izquierda. Así se exterminó a la mayor parte de los grupos guerrilleros aún antes de que los militares anularan la democracia presidencial en marzo de 1976. Los Montoneros siguieron actuando, fundamentalmente contra la policía, y lograron concretar una gran cantidad de operativos, pero pagaron un precio muy alto en la guerra sucia que las fuerzas de seguridad emprendieron contra ellos: hasta fines de 1976, unos dos mil montoneros resultaron muertos o desaparecidos; hasta abril de 1977, parte de los líderes y cuadros centrales de los Montoneros habían logrado escapar, radicándose por ejemplo en México u obteniendo asilo político en Italia. A través de sus políticas, el gobierno militar logró parte de los objetivos que se había impuesto, en especial la desmovilización de las masas y su exclusión de la escena política, reemplazada por una gestión estatal dirigista jerárquica y autoritaria. La represión y el terrorismo de Estado elevaron los niveles de miedo y recelo mutuos en la población, tendencia que resultaba instrumental para el proceso de desmovilización social. En la literatura profesional se encuentran muchos trabajos que describen la manera en que ese ambiente genera una desconfianza que puede servir de base para la despolitización. Este proceso se vincula también con la expansión del fenómeno de negación masiva y falta de voluntad de admitir el alcance de la represión, su magnitud y proyecciones públicas. En ese contexto prevalece una preocupación creciente de cada individuo por sí mismo y por su contexto inmediato, alejándose de la participación social general. Se desarrolla también un proceso de replegamiento que contribuye al alejamiento de la escena pública y a un nivel creciente de indiferencia por el destino de otras personas, por más cercanas que fueren.¹⁵

Por otra parte, la restricción del estado de derecho, el deterioro de las instituciones públicas y la coerción en la esfera política impidió la manifestación de cuestiones políticas y la realización de debates abiertos. La política económica de tendencia

¹⁴ Emilio F. Mignone, *Witness of Truth*. Maryknoll: Orbis, 1988, p. 71. Se debe recordar empero la labor loable de algunos miembros de la jerarquía como Jaime de Nevaes, Jorge Novak o Miguel Hesayne.

¹⁵ Linda Green, "Fear as a Way of Life", in: *Cultural Anthropology*, 19, 2 (1994): 227-257; Nancy Scheper-Hughes, *Death without Weeping* Berkeley: University of California Press, 1992.

neoliberal reforzó las tendencias individualistas y la dedicación al consumo, y de manera indirecta disolvió los compromisos sociales más amplios que existían en el pasado. Las influencias recíprocas entre estos procesos modificaron la sociedad argentina desde sus cimientos, y las organizaciones civiles y movimientos sociales disminuyeron su nivel de actividad, se llamaron a silencio o sencillamente dejaron de existir.

A nivel personal, el terror generó una “cultura del miedo” primaria aguda y temores secundarios prolongados. Aún después de la caída de la dictadura militar en 1983, con el advenimiento de un proceso de cura psicológica y la salida masiva a las calles, la revelación de los mecanismos de represión y la confrontación con los horrores del pasado cercano, siguieron borboteando claros índices de ansiedad prolongada de bajo nivel, característicos de situaciones postraumáticas.¹⁶

En tiempos de la dictadura militar surgieron diversas organizaciones de lucha contra la represión gubernamental y de defensa de los derechos humanos. La más famosa de todas es la de las Madres de Plaza de Mayo, que empezaron sus rondas frente a la Casa de Gobierno el 30 de abril de 1977, para reclamar la reaparición de sus hijas e hijos desaparecidos. Los pañuelos blancos que cubrían las cabezas de esas mujeres se convirtieron en el símbolo de la resistencia contra la represión y en una acusación contra una política de estado autoritaria e inmoral. Con el paso de los años, mientras el destino de los desaparecidos seguía en sombras, surgió la organización paralela de las Abuelas de Plaza de Mayo, nucleadas con el objeto de encontrar a los niños nacidos en cautiverio, hijos e hijas de mujeres secuestradas mientras estaban embarazadas y generalmente ejecutadas sumariamente poco después del parto. Muchos de esos hijos de parejas de desaparecidos fueron entregados en adopción a familias allegadas a las fuerzas represoras, crecieron bajo identidades suplantadas y fueron educados de manera diametralmente opuesta a los principios de sus padres biológicos. Sólo al cabo de años, las Abuelas de Plaza de Mayo lograrían encontrar a algunos de esos nietos, pero su ubicación se vio acompañada por procesos

¹⁶ Marcelo Suárez Orozco, “A Grammar of Terror: Psychocultural Responses to State Terrorism in Dirty War and Post-Dirty War Argentina”, in: Carolyn Nordstrom and Jo Ann Martin eds. *The Paths of Domination, Resistance and Terror*. Berkeley: University of California Press, 1992, pp. 219-259; ídem, “Speaking of the Unspeakable: Towards a Psychosocial Understanding of Responses to Terror”, in: *Ethos*, 18, 3 (1990), pp. 353-383.

psicológicos sumamente dolorosos para algunos de esos jóvenes, que les requirieron decisiones personales cuyas consecuencias varían de un caso a otro.

Otros grupos lucharon también para despertar la opinión pública local e internacional contra la represión, y por la reaparición con vida de los desaparecidos. La opinión pública internacional y organizaciones transnacionales que cooperaban con entidades locales hicieron mucho en este sentido. Los informes de Amnistía Internacional contribuyeron en gran medida a debilitar la posición internacional de la Argentina a través de la revelación de su política represiva: la Argentina perdió la ayuda militar de los Estados Unidos por los informes negativos que revelaban la dimensión de las violaciones de los derechos humanos. El Papa Juan Pablo II y otras personalidades manifestaron su preocupación por la situación en la Argentina y por la suerte de los desaparecidos. Países como Francia, España, Irlanda, Suecia e Italia pidieron aclaraciones públicas sobre la suerte de sus ciudadanos desaparecidos en la Argentina. Paradójicamente, los preparativos para la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que debía realizarse en 1979 para examinar de cerca la situación de los derechos humanos, generó una nueva ola de desapariciones, cuando el gobierno “evacuó” centros de detención y tortura y “trasladó” (es decir, asesinó) a detenidos-desaparecidos aún con vida. En aquella época algunos desaparecidos fueron arrojados al mar con vida desde aviones y helicópteros, para no reaparecer nunca más.

En el seno de las instituciones y la dirigencia comunitaria se perfilaron dos enfoques diferentes para afrontar el tema de los desaparecidos y los intentos de sus familiares por encontrarlos. Uno de ellos abogaba por el diálogo discreto con el gobierno, con el objeto de moderar las tendencias antisemitas y de aliviar la angustia de las víctimas judías. Ésta era la tendencia predominante en la DAIA y en otras instituciones. Por otra parte, hubo personas como Herman Schiller, director de *Nueva Presencia*, un semanario judío de gran difusión y tendencia progresista, y los rabinos Roberto Graetz y Marshall Meyer, que se expresaron abiertamente contra las persecuciones y con gran coraje trataron de ayudar a las víctimas. El Estado de Israel debió intervenir oficialmente por primera vez en julio de 1976, cuando cinco emisarios y tres activistas locales de un movimiento juvenil sionista fueron detenidos y desaparecidos por 13 días en la ciudad de Córdoba. Una vez que el jefe de la delegación de la Agencia Judía tomó la iniciativa y logró ubicarlos, la protesta oficial

de Israel hizo el resto y se logró que los ocho, incluyendo los ciudadanos argentinos judíos, fueran liberados. Fue este el primer caso de reconocimiento por parte de la Junta militar del *locus standi* de Israel respecto de los ciudadanos judíos de la Argentina. Lamentablemente, a pesar de tal reconocimiento, poco se logró respecto de la mayoría de los desaparecidos, en parte por el desconocimiento del paradero de los mismos y la política oficial de actuar al margen de la legalidad y pretender ignorar lo actuado. Otro caso que despertó ecos internacionales fue el de Jacobo Timerman, famoso periodista y director del diario *La Opinión*, arrestado por el gobierno y mantenido en un campo de detención por sus vínculos con David Graiver, un banquero judío sospechado de financiar la guerrilla. Los esfuerzos internacionales de Estados Unidos y la presión encubierta de Israel contribuyeron considerablemente a su excarcelación y a la autorización de su partida a Israel. Los representantes de Israel actuaron en otros casos y lograron organizar la salida de entre 350 y 400 perseguidos, pero no pudieron recuperar a los desaparecidos ni descubrir qué suerte habrían corrido.¹⁷

La participación de los rabinos Graetz y Meyer en la defensa de los derechos humanos los llevó a cooperar con otras entidades en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, creada en diciembre de 1975. De esta manera, el Movimiento Judío por los Derechos Humanos ejerció también influencia sobre círculos políticos que posteriormente habrían de conducir el movimiento de democratización y que lograron resonancia pública proyectando una imagen de resistencia judía a la dictadura y a todo lo que ella simbolizaba para el pueblo argentino y la opinión pública mundial. El rabino Graetz partió hacia Brasil en 1980, y el rabino Meyer prosiguió su labor a favor de las víctimas violaciones de derechos humanos en Argentina y el exterior, fue miembro de la CONADEP (la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) que investigó las desapariciones y recibió la orden al mérito General San Martín, la máxima condecoración conferida por la Argentina.

¹⁷ Joel Barromi, "Israel frente a la dictadura militar argentina: El episodio de Córdoba y el caso Timerman", en: *El legado del autoritarismo*, pp. 325-351; Leonardo Senkman: "La evacuación de judíos de la Argentina durante la dictadura militar", en: Dafna Sherfman, *¿Una luz para las naciones? La política exterior de Israel y los derechos humanos*, Tel Aviv: Kav Adom 1999, pp. 93-119 (en hebreo). Un análisis detallado puede consultarse en Mario Sznajder y Luis Roniger, "From Argentina to Israel: Escape, Evacuation and Exile", de próxima aparición en Inglaterra en el *Journal of Latin American Studies* (2005).

En 1978, y a partir de los intentos de mejorar la imagen de la dictadura militar, tuvo lugar en la Argentina el Campeonato Mundial de Fútbol, con el triunfo del país anfitrión. La atención internacional se centró en los aspectos más siniestros de la dictadura militar, y la crítica internacional se redobló por los testimonios sobre las violaciones masivas de derechos humanos. Las presiones y el repudio llevaron al presidente, general Videla, a proclamar que “los argentinos somos derechos y humanos”. Esta frase se convirtió en parte de la contra-propaganda del gobierno argentino, que logró convencer a muchos de sus ciudadanos al amparo del entusiasmo masivo que inundó al país después del Mundial. En 1980, y ante la creciente toma de conciencia internacional sobre las violaciones de derechos humanos en la Argentina, el Premio Nobel de la Paz fue otorgado a Adolfo Pérez Esquivel, un activista argentino en el campo de los derechos humanos. A pesar de la censura y de los intentos del gobierno de minimizar la distinción, el premio tuvo ecos en la Argentina y en cierta medida hizo tambalear la autocomplacencia y la negación extendida.

Hacia 1982, el gobierno militar debió afrontar crisis económicas y problemas sociales, junto al creciente deterioro de su posición internacional, la pérdida de prestigio y apoyo en el frente interno. Los restos de la ideología nacionalista llevaron a la cúpula de las fuerzas armadas a emprender una acción osada con el objeto de recuperar la dignidad nacional y renovar la sensación de unidad colectiva. De forma apresurada decidieron reconquistar las Islas Malvinas, ocupadas por Gran Bretaña desde 1833, a las que muchas generaciones de argentinos habían sido educados a considerar como territorio nacional. Argentina perdió la guerra, las fuerzas armadas perdieron toda legitimación, su prestigio profesional se esfumó y se enfrascaron en rencillas internas y acusaciones mutuas con respecto a la responsabilidad por la derrota militar. El gobierno militar se encontraba al borde del colapso.

En julio de 1982, después de la rendición de las tropas argentinas ante las fuerzas británicas, asumió el gobierno el último presidente militar, el general Reynaldo Benito Bignone, a quien no quedó sino estipular el proceso de retorno a elecciones democráticas, que permitieran a las fuerzas armadas entregar el poder a un gobierno elegido. Las elecciones se realizaron a fines de octubre de 1983, con el triunfo de Raúl Alfonsín, candidato del Partido Radical.

En septiembre de 1983, el gobierno militar saliente proclamó la Ley de Auto-amnistía, que de hecho constituía un claro reconocimiento de las violaciones de los

derechos humanos perpetradas. Esta ley habría de ser anulada con el retorno de la Argentina a la vida democrática. El 13 de diciembre de 1983, tres días después de asumir el poder, el presidente Alfonsín ordenó la detención y sometimiento a juicio de los titulares de las juntas militares que habían gobernado el país entre 1976 y 1983, así como los de los jefes guerrilleros que habían actuado en esa misma época. Dos días después, Alfonsín dispuso la creación de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) para investigar las desapariciones forzadas. La misma, integrada por activistas de derechos humanos y presidida por el escritor Ernesto Sabato, debía dilucidar el destino de las víctimas de la represión militar que las había hecho desaparecer.

El texto que resumió la labor de la comisión conmovió a la sociedad argentina. El informe completo se basa en 50.000 páginas de documentos y testimonios, e incluye un anexo con los nombres de 1.351 integrantes de las fuerzas armadas mencionados como violadores de derechos humanos en dichos testimonios. La comisión trató infructuosamente de lograr la cooperación de las fuerzas de seguridad a fin de aclarar la suerte de los desaparecidos. Los nombres de los represores fueron finalmente entregados al Ministerio de Justicia, a fin de que se los sometiera a juicio.

El prólogo del informe, publicado en el libro *Nunca más* poco después de que aquel fuera presentado al presidente Alfonsín, se convirtió en el best seller más destacado en la historia de la letra impresa en la Argentina. Desde su publicación a fines de 1984 ha habido numerosas reimpressiones y se ha vendido más de un cuarto de millón de ejemplares. El libro, que fue traducido a diversos idiomas (incluido el hebreo),¹⁸ detalla los modos represivos, los lugares de detención y métodos de tortura, incluye fragmentos de los testimonios directos de numerosas víctimas y menciona los nombres de 8.961 desaparecidos y 365 campos de detención, tortura y asesinato.

Las fuerzas armadas rechazaron las conclusiones de la comisión sobre el destino de las víctimas, y las del informe publicado. En su opinión, habían ganado la guerra contra la izquierda y salvado a la Argentina del yugo de una dictadura comunista. Para ellas, las violaciones de los derechos humanos eran una consecuencia inevitable y justificada de su lucha total contra el terrorismo de izquierda. La publicación del informe y el libro, y la falta de disposición de los tribunales militares para juzgar a los

¹⁸ *Nunca más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas*. Trad.: Enrique Zadoff. Buenos Aires: Eudeba, 1998.

responsables de las violaciones masivas de los derechos humanos constituyeron el telón de fondo sobre el cual se iniciaron los juicios a los comandantes en tribunales civiles. Al principio de la democratización, el presidente electo delegó en el tribunal supremo de las fuerzas armadas someter a juicio a los integrantes de las juntas, pero éste no estaba en condiciones de cumplir con dicha misión y en septiembre de 1984 los casos volvieron a la corte federal, al tiempo que se publicaba el informe de la CONADEP. Además de ello, el gobierno argentino resolvió crear una Subsecretaría de Derechos Humanos, en el marco del Ministerio del Interior.

La lucha por la memoria y la revelación de los hechos por detrás del clamor de las víctimas y sus familiares impulsaron a la realización de un juicio penal. Las imágenes del juicio a los integrantes de las juntas militares llegaban a todos los hogares. Paralelamente, y con sólo algunos días de demora, los testimonios y el curso completo del juicio fueron publicados en un periódico especialmente editado y vendido en los quioscos durante treinta y seis semanas, de mayo de 1985 a enero de 1986. La publicación, llamada *El diario del juicio*, vendió más de un cuarto de millón de ejemplares por semana y convirtió al juicio en el epicentro de la vida pública en aquellos días. Los jueces aceptaron los argumentos de la fiscalía y condenaron a parte de los integrantes de las juntas militares, distinguiendo entre diversos grados de culpabilidad. Las penas oscilaron desde la reclusión perpetua para el general Videla y el almirante Emilio Massera, hasta cuatro años de prisión para el brigadier Orlando Agosti; cuatro ex integrantes de las juntas fueron absueltos. Los jueces recomendaron someter a juicio a todos los miembros de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables de violaciones de los derechos humanos cuyos nombres fueron mencionados en los testimonios de los familiares de las víctimas, los allegados y amigos de los muertos y desaparecidos. Esta recomendación de la corte generó presión sobre las fuerzas de seguridad, que se aglutinaron ante esta amenaza y presionaron a su vez a los estamentos políticos para poner fin a los que ellas veían como una persecución contra los militares.

Así ingresó la Argentina a un período en el cual el sistema político se vio sometido a presiones cruzadas. Por una parte, numerosas víctimas y organizaciones de defensa de los derechos humanos apelaron ante la corte a fin de promover demandas contra miembros de las fuerzas de seguridad directamente responsables de lo sucedido a ellas o a sus familiares. Por otra parte, volvió a oírse el sonar de las espadas que

amenazaban la estabilidad del gobierno civil. El presidente Alfonsín trató de aplacar los ánimos promoviendo la Ley de Punto Final, que fijaba de antemano una fecha para la finalización de los procedimientos judiciales contra los militares implicados. Esta ley, promulgada en diciembre de 1986, dio lugar a manifestaciones masivas. A diferencia de su objetivo específico, la ley suscitó una ola de demandas judiciales que anegaron los tribunales con el objeto de someter a los responsables a juicio dentro de los límites de tiempo asignados por la Ley de Punto Final.

Los dirigentes de la fuerzas armadas en el pasado y en el presente empezaron a manifestarse públicamente contra los intentos de investigar y juzgar a sus hombres que habían participado activamente en los diversos operativos contra la izquierda y otros civiles en tiempos del gobierno militar. Los oficiales se negaban a comparecer ante los tribunales, cuando eran convocados a hacerlo. En la Semana Santa de 1987 estalló una rebelión militar contra el gobierno civil, y el presidente Alfonsín debió negociar con los rebeldes sin el apoyo de la cúpula militar. Cuando cerca de un millón de personas salieron a la calle en son de protesta y con el objeto de condenar la rebelión, Alfonsín llegó a un entendimiento con los rebeldes, que finalmente se rindieron. La consecuencia fue la promulgación de una nueva ley que limitaba las posibilidades de sometimiento a juicio y asunción de responsabilidad por las violaciones de los derechos humanos durante el gobierno militar sólo a los oficiales de altos grados, de teniente coronel o más. Esta ley aprobada en junio de 1987 de hecho puso fin a los intentos de investigar y someter a juicio a los implicados directos en las brutales violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de “la guerra sucia”. La sociedad civil se sintió impotente ante este retroceso en el intento de hacer justicia con los involucrados en las torturas, violaciones y ejecuciones sumarias.

El retroceso en la política de derechos humanos de Alfonsín fue la primera manifestación de la pérdida de confianza pública y del debilitamiento de su gobierno que, entre otras cosas, sufrió reiteradas y crecientes crisis económicas. El ejército reorganizado y recompuesto, generó oposición al gobierno e impuso nuevas condiciones en medio de rebeliones locales.

Alfonsín perdió las elecciones presidenciales de 1989, en las que resultó triunfador el candidato peronista Carlos Saúl Menem. Ante la crisis económica y la hiperinflación, Alfonsín debió traspasar el mando medio año antes del fin de su período presidencial. En el ámbito de los derechos humanos, Menem adoptó una

estrategia un poco diferente de la de su predecesor: optó por conceder un indulto explícito y arrollador a los integrantes de las juntas militares, al tiempo que indultó también a los líderes de la guerrilla; a cambio de ello exigió la obediencia absoluta de las fuerzas armadas. Las concesiones efectuadas en el campo de la justicia y las violaciones de los derechos humanos se combinaron con la exigencia intransigente de que las fuerzas armadas estuvieran totalmente sometidas a la presidencia. Esto le permitió también aprovechar un caso escandaloso recientemente descubierto - el asesinato de un recluta y su posterior ocultamiento - para promover la iniciativa política que convirtió al ejército en un cuerpo profesional y pequeño, anuló el servicio militar obligatorio y lo convirtió en voluntario. Esto se sumó a la reducción del presupuesto militar y a una derivación de recursos más puntual, orientada a los beneficios, la profesionalización y la integración de las fuerzas armadas en el marco de las tropas de las Naciones Unidas que prestan servicios en diversos lugares del mundo. Con respecto a las víctimas, el gobierno de Menem promulgó leyes que les concedían indemnizaciones y reparaciones, política rechazada por algunas de las organizaciones de familiares de los desaparecidos.

Al cabo de muchos años de lucha por los derechos humanos y contra las violaciones en un pasado no lejano, muchos interrogantes continúan pendientes y siguen influyendo sobre la construcción de la memoria colectiva e histórica. Estas cuestiones, que guardan relación con el desbarrancamiento de la Argentina a abismos morales y públicos desconocidos hasta 1976-1983, y que dieron origen al fenómeno de los desaparecidos y que acuñaron ese concepto como uno de los trágicos “aportes” argentinos al léxico internacional, siguen persiguiendo al país hasta el presente.